

**ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL
PLENO DE LA CORPORACION MUNICIPAL, EL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2006,
A LAS 17,30 HORAS.**

ASISTENTES:

Alcalde-Presidente: D. JOAQUIN-CARLOS HERMOSO MURILLO

<u>Concejales Grupo PSOE:</u>	ANTONIO RODRIGUEZ MATEOS
"	RAQUEL GOMEZ CASTELLANOS
"	LUIS-FRANCISCO PIZARRO RUIZ
"	CELIA MANSILLA HIDALGO
"	SABAS NOGALES RODRIGUEZ
"	ANA ISABEL FERNANDEZ FRAILE
"	JOVITA VOZMEDIANO SANCHEZ
"	JOSEFA-MARIA AMARO ZAMORA
"	JUANA NUÑEZ ALMENA
"	ESTEBAN FERNANDEZ FERNANDEZ
"	MANUELA SANCHEZ MORA

<u>Concejales Grupo Popular:</u>	JUAN-JOSE JIMENEZ PRIETO
"	MARIA-JOSE CIUDAD ZARIQUIEGUI
"	MARIA ENCARNACIÓN VALDENEBRO
"	TORREGROSA
"	APOLONIO GONZALEZ MOLINA
"	JOAQUIN GARCIA-CUEVAS HOLGADO
"	JOSE-ANTONIO MONTERO CAMACHO
"	ALEJANDRO LLANOS GRANDE
"	MARIA DE GRACIA CASADO ALBERTOS
"	ROSALIA GARCIA RAYA

<u>Concejales Grupo I. Unida:</u>	FLORENTINO LOPEZ MONTERO
"	AGUSTIN PEREZ MOTILLA

Secretario Acctal.: JUAN-LUIS VAZQUEZ CALVO

Interventor Acctal Fondos: JAVIER BARQUILLA ALVAREZ

<u>No asisten:</u>	ANTONIO MENDEZ PEREZ
"	MARIA-ESTHER ROMERO CAYETANO

En Puertollano, a las diecisiete horas y treinta minutos del día siete de noviembre de dos mil seis, se reúnen en el Salón de Actos de este Ayuntamiento, los concejales arriba relacionados, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. JOAQUIN-CARLOS HERMOSO MURILLO, asistidos del Sr. Secretario Accidental de la Corporación, D. JUAN-

LUIS VAZQUEZ CALVO, y con asistencia del Sr. Interventor Accidental de fondos, al objeto de celebrar la sesión ordinaria convocada para este día.

Antes de entrar en el Orden del Día, se guardó un minuto de silencio en solidaridad con las víctimas de la violencia.

Abierto el acto por el Sr. Alcalde, anuncia el fallecimiento reciente del que fue Concejal de esta Corporación, del Grupo Popular, D. MAURICIO CABALLERO, destacando el afecto y cariño que desde esta Corporación se le reconoce por su labor y dedicación en este Ayuntamiento, mientras ejerció su función de Concejal, haciéndose constar expresamente el reconocimiento de la Corporación Municipal, que se traslada a la presente Acta.

A continuación, el Sr. Secretario, dio cuenta de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, respecto de los cuales, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1. JUSTIFICACION DEL CARÁCTER EXTRAORDINARIO DE LA PRESENTE SESION DE PLENO.

Por el Sr. Alcalde Presidente, se justifica ante este Pleno, la razón de la convocatoria del mismo, con el carácter extraordinario, en base a la necesidad de adoptar el acuerdo incluido en el Orden del Día, que figura como punto número 2, informándose por el Sr. Secretario de la Corporación de la necesidad de dar cumplimiento a la exigencia legal recogida en los artículos 46.2b) de la Ley de Bases de Régimen Local, artículo 48.2 del texto refundido y 79.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, para la validez de este Pleno, y tratándose un acuerdo de máxima importancia sobre propuesta de rescisión de contrato.

2. EXPEDIENTE SANCIONADOR INCOADO A LA EMPRESA CONCESIONARIA GRUPO ZEOS 2005, S.L., POR LA EXPLOTACION DEL CENTRO DE OCIO Y NATURALEZA DE LA DEHESA BOYAL, EN PUERTOLLANO.

Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, de fecha 11 de octubre de 2006, relativo a propuesta de Resolución del Contrato o concesión arriba reseñada, que se transcribe literalmente:

"19. CONTRATACIÓN (Propuesta de resolución en expediente sobre rescisión de la concesión del Centro de Gestión de Ocio y Naturaleza de la Dehesa Boyal en Puertollano).

Se da cuenta del expediente incoado, referido a la concesión administrativa arriba reseñada y de la propuesta de resolución dictada por el Sr. Instructor del mentado expediente, que literalmente se transcribe:

“Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 9 de agosto del año en curso, se inicia expediente sancionador, al concesionario del centro de gestión de ocio y naturaleza de la Dehesa Boyal, en Puertollano, como consecuencia de la entrada en este Ayuntamiento, el cuatro de agosto, de cédula de citación de la Delegación Provincial de Trabajo y Empleo, a fin de celebrar acto de conciliación, en relación con el despido de cuatro trabajadores vinculados al Grupo Zeos, concesionario del centro de gestión de ocio y naturaleza de la Dehesa Boyal.

Como consecuencia de ello, se requiere, en la misma fecha, a la concesionaria, para la remisión de la documentación laboral de los trabajadores despedidos, a saber: D. Raúl de Gregorio Moreno, D^a Gloria Torres Rivero, D^a Maria Teresa Arriaga Cervera y D. Carmelo Javier de Gregorio Moreno, comprobándose que los mismos carecen de contrato de trabajo.

En virtud del deber de colaboración entre las distintas Administraciones Públicas, a que se refiere el art. 4 de la Ley 30/93, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se envía la documentación presentada por el Grupo Zeos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al objeto de que adopten las medidas a que haya lugar.

Asimismo se nombra instructor del expediente y secretario, comunicándose la iniciación del mismo, al propio instructor, a los denunciantes, así como al Grupo Zeos, concediéndole, a este último, un plazo de quince días, para que realice cuantas alegaciones tenga por conveniente.

En escrito dirigido a la Alcaldía el día 31 de agosto, D. Cesar Santos Casado, en calidad de Administrador Unico, y en nombre y representación de la entidad Grupo Zeos 2005, S.L., realiza alegaciones en las que interesan, al Ayuntamiento, el sobreseimiento y archivo del expediente sancionador iniciado, ya que, se ha solventado la cuestión de tres de los cuatro trabajadores, estando pendiente por resolver, dentro de los cauces procesales oportunos, respecto al cuarto; considerando que, tal y como se desprende del propio pliego de cláusulas administrativas particulares, no existe, en ningún momento, vinculación entre dicho personal y el Ayuntamiento, y por tanto, en nada afecta. Asimismo presenta acta de conciliación, contratos de trabajo de los afectados, comunicación de los mismos al INEM, resoluciones sobre reconocimiento de altas y bajas en la Seguridad Social, y finiquitos firmados por algunos trabajadores, tal y como consta en el expediente.

A la vista de la documentación presentada, el instructor propone, como medio de prueba, la comparecencia de los denunciantes de los hechos, que dieron lugar a la iniciación del procedimiento y de los denunciados. Compareciendo, como denunciantes, D^a Gloria Torres Rivero, el día 6 de septiembre a las once de la mañana y D. José Raul de Gregorio Moreno a las doce horas, y como denunciados D. Cesar Santos Casado, representante legal del Grupo y D. Jesús Santos García de León, padre del anterior y D. Pedro Santos Rico, como letrado representante de los anteriores.

D^a Gloria Torres Rivero, además de otras consideraciones, confirma en su comparecencia, lo que evidencia la documentación presentada por el Grupo Zeos en el período de alegaciones, de tal modo, que comienza a trabajar el día 1 de junio, entregando, el día 4 del mismo mes, toda la documentación que le exigieron para hacer su contrato, el día 21 de julio firma este último no conforme, porque según manifiesta, si no lo hacía no cobraba el finiquito de ciento dos o ciento tres euros que le pagaron, se la despide el día 23 de julio y se le comunica su contrato al INEM el día 24 de julio, dándosela de alta en la Seguridad social el día 21 de julio y de baja el día 23 del mismo mes.

D. José Raúl de Gregorio Moreno además de otras consideraciones confirma, igualmente, en su comparecencia, lo que evidencia la documentación presentada por el Grupo Zeos, en el período de alegaciones, de tal modo que comienza a trabajar el día 21 de junio, no firma contrato de trabajo, se le despide el día 23 de julio y se le comunica su contrato al INEM el día 25 de julio, dándosele de alta en la Seguridad Social el día 24 de julio y de baja el día 23 de julio.

En la comparecencia de los representantes del Grupo Zeos, además de otras consideraciones que aparecen en la misma, y ante la pregunta del instructor de si consideran fundamentada la iniciación del expediente, reconocen que ha habido cuatro trabajadores que han estado sin contrato de trabajo y sin dar de alta en la Seguridad Social. Ante la pregunta del instructor de si D. Gloria Torres Rivero llevaba efectivamente trabajando desde el 1 de junio, aunque su contrato tienen fecha de julio y su registro en el INEM es del 25 de julio, D. Jesús Santos contesta afirmativamente. La misma pregunta realiza el instructor, respecto a las irregularidades encontradas en la documentación correspondiente a D. José Raúl de Gregorio Moreno, contestando afirmativamente D. Jesús. No obstante consideran que, estas irregularidades, se deben a un error informático de la gestoría y a un momento de aceleración puntual, debido a la urgencia por abrir la piscina y poner todas las instalaciones operativas, de modo que, no pudieron ocuparse de comprobar, si las gestiones que ellos habían encomendado a otras estaban realizadas correctamente.

Por todo ello, de la documentación aportada por el servicio de mediación, arbitraje y conciliación de la Delegación Provincial de Trabajo y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha; por el grupo Zeos, y de los testimonios vertidos por las partes implicadas, se constata la existencia de cuatro trabajadores sin contrato y sin dar de alta en la Seguridad Social, que han trabajado, en esas condiciones, para el grupo Zeos, concesionaria del Centro de Gestión de Ocio y Naturaleza de la Dehesa Boyal. Que dichas irregularidades suponen una infracción de lo previsto en la letra f) del art. 20 del Real Decreto Legislativo 2/2000, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas, artículo recogido en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigió en esta contratación, en la cláusula séptima, referida a las obligaciones exigibles al licitador. Que esta obligación, tan sumamente importante que prohíbe, a quien la incumple, contratar con la administración, se considera igualmente importante durante la vigencia del contrato, ya que la letra g) del art. 109 del texto legal anteriormente citado, establece como

causa de resolución del contrato “ el incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales”, de la que esta es una muestra evidente, ya que no tendría sentido una exigencia inicial tan rígida, que no fuera aplicable en el desarrollo del contrato, pudiendo incluso considerarse como una causa de nulidad sobrevenida, tal y como recoge el art. 62, letra b) del mismo texto legal.

Por todo ello, se propone, la resolución, al Grupo Zeos, de la Concesión de la gestión del Centro de Ocio y Naturaleza de la Dehesa Boyal, en Puertollano, debiendo seguirse el procedimiento previsto en el art. 109 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas, dándose audiencia al contratista por plazo de diez días naturales, informe del servicio jurídico y dictamen del Consejo Consultivo de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha, si el contratista formulase oposición.

Propuesta que se eleva al órgano de contratación, a los efectos que este considere oportuno. Puertollano, 27 de Septiembre de 2006. Fdo.- Florentino López Montero”

Visto lo dispuesto en los arts. que se citan en la mencionada propuesta de resolución por infracción del apartado f) del artº. 20 del Real Decreto Legislativo 2/2000 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, artículo recogido expresamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigió en esta contratación, en la Cláusula 7ª, referida a las obligaciones exigibles al licitador; y el apartado g) del artículo 109 del anterior Texto Legal, que regula como causa de resolución del contrato “el incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales”, todo ello en consonancia también con lo establecido en el artº. 62, apartado b) del mismo texto legal; y visto asimismo lo establecido en el artº. 109 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, estableciéndose en esta última norma los trámites o requisitos que se han de seguir en todo expediente que pueda conllevar la adopción de medida de rescisión del contrato suscrito; enterada la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por mayoría simple de un único voto a favor del concejal adscrito al Grupo de Izquierda Unidad y ocho abstenciones de los concejales adscritos al Grupo Socialista, acuerda:

1º. Aceptar y ratificar la propuesta de resolución que anteriormente se ha transcrito del Sr. Instructor del expediente, y como consecuencia de ello que se lleve a cabo el cumplimiento de los requisitos y trámites procesales que legalmente vienen exigidos en el artº 109 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) que se traduce en el presente supuesto en los siguientes trámites procesales:

- a) Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el caso de propuesta de oficio.*

Como consecuencia de esta obligación, el presente acuerdo deberá ser notificado a la entidad concesionaria y expedientada, GRUPO ZEOS 2005, S.L., con domicilio en con domicilio en Ciudad Real, Calle Tomillo, 7, portal 8, Bajo A, al objeto de que en el plazo de diez días naturales contados a partir del siguiente hábil al de notificación de este acuerdo la entidad concesionaria y expedientada pueda formular las alegaciones que estime pertinentes y tomar conocimiento y vista de todo el expediente administrativo.

- b) Se deberá emitir Informe del Servicio Jurídico Municipal correspondiente conforme se exige en el apartado c) del reseñado artº 109 con las consecuencias legales inherentes a dicha exigencia.*
- c) Cumplimentados los anteriores trámites, y en el supuesto de que existiera oposición del concesionario a la medida de rescisión contractual propuesta por el Sr. Instructor, se deberá remitir todo el expediente administrativo al Organo Consultivo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al objeto de que por dicho Organo se emita el preceptivo dictamen conforme se exige en el apartado d) del reseñado artº. 109.*
- d) A resultas de la cumplimentación de todos los trámites anteriores, se adoptará la decisión definitiva por el Organo de Contratación competente en esta materia.*

2º. El presente acuerdo se deberá notificar a la Entidad Concesionaria, Departamento de Patrimonio y Contratación, Servicios Económicos Municipales, Urbanismo, Departamento de Medio Ambiente y dar cuenta del mismo al Pleno de la Corporación Municipal."

En cumplimiento de los trámites establecidos en el citado artículo 109 del Reglamento de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas, (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre), se dio traslado de dicho acuerdo de la Junta de Gobierno Local, a la empresa concesionaria expedientada, al objeto de cumplimentar el trámite de vista del citado expediente, formulando la empresa concesionaria alegaciones, en tiempo y forma, con el resultado que consta en el expediente. Una vez evacuado ese trámite, y habida cuenta que no se ha mostrado oposición expresa al expediente sancionador, no es necesario evacuar el trámite de emisión de Dictamen por el Consejo Consultivo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, quedando obviado de esta forma, el apartado d) del citado artículo 109, quedando únicamente por cumplimentar el trámite referido al apartado c) de dicho artículo, consistente en emisión de informe del Servicio Jurídico de este Ayuntamiento, todo ello, con carácter previo al acuerdo que de forma preceptiva, en todo el expediente sancionador, debe adoptar el órgano de contratación que es este Pleno.

El citado informe del Servicio Jurídico, ha sido emitido por el Sr. Secretario Accidental de este Ayuntamiento, habida cuenta que viene ostentando las funciones de Asesoría Jurídica, y que se transcribe literalmente, a continuación:

"INFORME.- ASUNTO: EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO SOBRE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO Y LA ENTIDAD GRUPO ZEOS 2005, S.L., PARA LA GESTION DEL CENTRO DE OCIO Y NATURALEZA DE LA DEHESA BOYAL DE PUERTOLLANO.

I. ANTECEDENTES.

1º. *En fecha 22 de septiembre de 2005, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria, adoptó acuerdo, por mayoría absoluta, adjudicando a la empresa GRUPO ZEOS 2005, S.L., la explotación arriba reseñada, bajo la figura de concesión administrativa, con arreglo a las exigencias recogidas en dicho acuerdo plenario y Pliego de Cláusulas Administrativas que rigió la contratación originaria.*

2º. *Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 9 de agosto de 2006 se inicia expediente sancionador a la empresa concesionaria, como consecuencia de la entrada en este Ayuntamiento, el 4 de agosto, de cédula de citación de la Delegación Provincial de Trabajo y Empleo, a fin de celebrar Acto de Conciliación en relación con el despido de cuatro trabajadores vinculados a la empresa concesionaria.*

3º. *Tramitado el mentado expediente sancionador, se dicta propuesta de resolución contractual de la concesión por el Sr. Instructor designado, tomando conocimiento la Junta de Gobierno Local y por acuerdo de fecha 11 de octubre de 2006, se adopta acuerdo aceptando dicha propuesta con el cumplimiento de los trámites procesales previstos en el artículo 109 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por R.D. 1098/2001, de 12 de octubre.*

4º. *En fecha 27 de octubre de 2006, se presenta escrito de alegaciones por la empresa concesionaria GRUPO ZEOS 2005, S.L., y entre otras consideraciones, se solicita "declarar firme el señalado acuerdo y por concluido, sin posición, el procedimiento previsto en el artículo 109 del Reglamento General 1098/2001..."*

II. CARÁCTER PRECEPTIVO DE LA EMISION DEL PRESENTE INFORME.

Este informe tiene su justificación legal en el artículo 109, apartado c) del anterior Reglamento General, y tiene el alcance jurídico que le permite la legislación en materia de contratación administrativa, si bien, NO ES VINCULANTE, para la adopción de acuerdo por el órgano de contratación municipal.

III. OBLIGACION O NO DE CUMPLIMENTAR OTROS TRÁMITES PROCESALES.

Habida cuenta que en el trámite preceptivo de “audiencia del contratista”, el concesionario GRUPO ZEOS 2005, S.L., de forma expresa, no muestra oposición a la propuesta de rescisión de la concesión administrativa, ya no es necesario solicitar el preceptivo dictamen del Consejo de Estado (en este supuesto, Consejo Consultivo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha), conforme se recoge en el apartado d) del artículo 109, antes mencionado, por lo cual, una vez evacuado el presente trámite de emisión de informe del Servicio Jurídico, solo resta adoptar el oportuno acuerdo por el órgano de contratación municipal.

IV. LEGISLACION APLICABLE.

R.D.L. 2/2000 de 16 de junio, de Contratos de las Administraciones Públicas.

R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado en el año 1955.

V. FONDO DEL ASUNTO.

Lo que se dirime o dilucida en este caso, es la resolución contractual o caducidad de la concesión administrativa, referida a la explotación del Centro de Ocio de la Dehesa Boyal, que fue objeto de contratación y adjudicación por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 22 de septiembre de 2005, y todo ello en base a la posible concurrencia de causa legal y/o contractual, constitutiva de incumplimiento contractual imputable al concesionario.

La propuesta del Sr. Instructor abunda en la tesis de que se ha producido una infracción grave, “esencial”, del citado contrato, y por ello, invocando el artículo 20 apartado f) del R.D.L. 2/2000 de Contratos de las Administraciones Públicas, en relación con su artículo 62, apartado b) y cláusula séptima del Pliego de Condiciones, así como por infracción del artículo 111 de la citada Ley de Contratos de la Administración Pública.

Las causas legales de resolución o rescisión, en su caso, de todo contrato administrativo, vienen expresamente reguladas y recogidas en el mentado artículo 111 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, si bien por remisión normativa, para el presente caso, también hay que acudir a los artículos 115, 128, 131, 132, 133 y concordantes del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado en el año 1955.

El mentado artículo 111, recoge una serie de causas legales, que justifican la resolución de todo contrato, y que operan de forma automática en los supuestos de “declaración de quiebra, de concurso de acreedores, de insolvencia o fallido en

cualquier procedimiento, ...", como se infiere de la lectura del artículo 112.2 del R.D.L. 2/2000, e interpretación jurisprudencial.

Las posibles restantes causas de resolución contractual tienen un tratamiento específico por la citada norma legal (por ejemplo: en caso de demora, modificación del contrato que implique más del 20% de su cuantía, no prestación de garantía definitiva, mutuo acuerdo entre Administración y Contratista, muerte o incapacidad sobrevenida del contratista), reservando el legislador dos supuestos genéricos de posible resolución del contrato, residenciados en los apartados g) y h) del artículo 111 y que de forma genérica califica como:

- "g). El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales.*
- h). Aquellos que se establezcan expresamente en el contrato".*

Pues bien, en la propuesta del Sr. Instructor e informe de la Sra. Secretaria, se alude, de forma genérica al apartado g) del artículo 111, como causa que justifica la resolución contractual, por entender demostrado que GRUPO ZEOS 2005, S.L., incurre en causa esencial de incumplimiento al detectarse que cuatro trabajadores de la empresa no estaban en situación laboral correcta o legal (situación relacionada con formalización de contrato laboral y altas/bajas en Seguridad Social).

Esa justificación legal la basa el Sr. Instructor, poniéndola en relación con la vulneración del artículo 20 apartado f) y artículo 62.2.b) de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas, y con la cláusula séptima del Pliego de Cláusulas Administrativas.

La decisión jurídica propuesta por el Sr. Instructor, en este caso, la resolución del contrato y la concesión administrativa, es la más grave contemplada en nuestro ordenamiento jurídico y, con todos los respetos que me merece la labor desarrollada por el Sr. Instructor y Sra. Secretaria del expediente sancionador, discrepo de tal medida por los siguientes:

FUNDAMENTOS O RAZONAMIENTOS LEGALES

PRIMERO. El incumplimiento detectado en la concesión administrativa, es meramente puntual y afecta a cuatro trabajadores, quienes interpusieron demanda o reclamación laboral contra la empresa GRUPO ZEOS 2005, S.L., con el siguiente resultado judicial:

- D^a GLORIA TORRES RIVERO, acepta la extinción de su contrato laboral, con pago de indemnización económica por parte de la empresa concesionaria. (Acta Conciliación 18-8-06)*
- D. CARMELO-JAVIER DE GREGORIO MORENO, es considerado desistido en la anterior reclamación y Acta de Conciliación.*
- D^a MARIA-TERESA ARRIAGA CERVERA, es consierada desistida en la anterior reclamación y Acta de Conciliación.*

- *D. JOSE-RAUL DE GREGORIO MORENO, (sin avenencia en la conciliación, pendiente del proceso laboral).*

Por tanto, la hipotética infracción o incumplimiento ha quedado solventada en la vía laboral por los propios interesados o afectados, sin participación de este Ayuntamiento y sin que se haya producido perjuicio alguno para esta Administración Local.

SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, estimo que se debió ponderar tal situación y moderar la propuesta de sanción, respetando el principio de proporcionalidad, de rango constitucional, conforme viene exigiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de resolución, caducidad y secuestro de concesiones administrativas.

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 27-9-1985, declara que: “La responsabilidad derivada del incumplimiento debe ponderarse conforme a las normas y los principios orientadores de la culpa contractual”.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 20-9-1983 y el Consejo de Estado, insisten en esa dirección doctrinal al señalar que: “No basta cualquier incumplimiento del contrato para acordar la extinción anticipada del mismo, sino que es necesario que se trate de un incumplimiento grave, cualificado, al ser la resolución la consecuencia más grave que puede derivarse de esta circunstancia”.

Y es aquí, en donde modestamente estimo que se ha incurrido en error en la apreciación y calificación de la prueba practicada en el expediente sancionador, ya que, el motivo aducido por el Sr. Instructor y Sra. Secretaria del mismo, es calificado como esencial o grave el incumplimiento de carácter laboral que provocó la incoación de dicho expediente, ya que considero que no se ha generado o producido falta o incumplimiento esencial por la empresa adjudicataria.

Ni siquiera se ha utilizado, previamente, el procedimiento o trámite previsto en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, en sus artículos 132, 133, 134 y 135, que curiosamente exigen a la Administración la interpelación al concesionario para que éste subsane en un plazo determinado, la deficiencia o incumplimiento detectados, todo ello en el marco legal previsto para el secuestro provisional o temporal de una concesión, y únicamente permite la norma legal llevar a cabo la caducidad de la concesión administrativa, o lo que es lo mismo la resolución contractual, en los supuestos concretos recogidos en el artículo 136 del anterior Reglamento de Servicios, sin que aparezca, ni de forma indiciaria, el mero incumplimiento leve del concesionario.

En el presente caso, se ha optado directamente por la resolución o caducidad de la concesión, sin apoyatura legal suficiente. Tanto es así, que la propia Sra. Secretaria del expediente, en su informe legal de fecha 25 de septiembre de 2006, recoge esta situación cuando destaca que la causa alegada para la resolución no

aparece expresamente en el Pliego de Condiciones que rigió la contratación, ni aparece el cuadro de sanciones específicas para caso de incumplimientos concretos, etc., finalizando su informe con la siguiente recomendación: ".....en todo caso, la rescisión por los motivos indicados sería una cuestión de interpretación, que debe seguir el procedimiento indicado en el artículo 109 del R.D. 1098/2001, Reglamento de Contratos de las Administraciones Públicas".

No se puede ocultar que también es cierto que en la resolución del Sr. Instructor y Sra. Secretaria, se procura fundamentar su postura jurídica aludiendo a una posible infracción del artículo 20 f) del R.D.L. 2/2000 de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas, que alude a las prohibiciones para contratar con la Administración, pero dicha norma no es de aplicación al presente caso porque de una somera lectura del mismo, se puede observar que tal prohibición tiene carácter previo y viene referida al momento de concurrir a una licitación cualquier empresa o persona, afectando directamente a estos en el momento de presentarse a la licitación, como también se menciona en la cláusula séptima del Pliego, pero no se puede extrapolar, "mutatis mutandis", a todo incumplimiento contractual posterior que afecte a personas que trabajen, en este caso, en la concesión. Para mayor abundamiento, se citan las bases o cláusulas del citado Pliego, séptima y décima, careciendo dicho Pliego y/o posterior contrato administrativo del preceptivo cuadro de sanciones específicas que se exige expresamente por el artículo 115 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

VI. CONCLUSIONES.

PRIMERA. En uso de las facultades que reconoce el reiterado artículo 109 del Reglamento de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas, CONSIDERADO Y RECOMIENDO que el órgano de contratación (Pleno Municipal), debe DESESTIMAR LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO suscrito entre este Ayuntamiento y la empresa GRUPO ZEOS 2005, S.L., para la explotación del Centro de Ocio de la Dehesa Boyal de Puertollano, por considerar que no concurren causas legales que justifique dicha medida, debiendo continuar la citada explotación conforme a lo pactado en su día por este Ayuntamiento y la empresa.

SEGUNDA. Si lo considera oportuno el órgano de contratación, se puede tramitar expediente sancionador por los mismos hechos a la empresa concesionaria, por si los hechos imputados fueran merecedores de sanción económica.

TERCERA. No quedaría completo este informe si el Técnico que suscribe, no informara al órgano de contratación de las posibles consecuencias legales que podrían derivarse de la adopción de un acuerdo plenario a favor de la resolución o caducidad de la presente concesión administrativa, y que se concretan en las siguientes:

- 1. Reclamación del concesionario de los daños y perjuicios económicos que se derivan de toda caducidad o resolución de la concesión administrativa, a determinar en vía judicial.*

2. *Responsabilidad municipal frente a trabajadores, por rescisión de sus contratos laborales y frente a proveedores del citado Centro de Ocio.*
3. *No obstante, el presente informe jurídico carece de carácter vinculante, por lo que el órgano de contratación, puede adoptar el acuerdo que estime más oportuno.*

Puertollano, 6 de noviembre de 2006.- EL SECRETARIO.- Fdo. JUAN-LUIS VAZQUEZ CALVO."

Una vez que han sido evacuados todos los informes preceptivos conforme se recoge en el artículo 109 del Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas, se somete a conocimiento y adopción de acuerdo, la propuesta de Resolución que en su día fue dictada por el Sr. Instructor del expediente sancionador, y que proponía en la misma (Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 11 de octubre de 2006), la rescisión o caducidad de la concesión administrativa y, por ende, de toda la contratación suscrita entre este Ayuntamiento y la entidad GRUPO ZEOS 2005, S.L.

El Pleno de la Corporación Municipal, dando cumplimiento al tan mencionado artículo 109.1 del Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas, en votación ordinaria y por mayoría simple de doce votos de los concejales del Grupo Socialista, en contra de la propuesta del Sr. Instructor del expediente sancionador, y nueve votos de abstención de los concejales del Grupo Popular, y dos votos a favor de los concejales del Grupo de Izquierda Unida, **ACUERDA:**

1º. Desestimar o rechazar la propuesta del Sr. Instructor del expediente sancionador y, por consiguiente, no ha lugar a la rescisión o caducidad del contrato y concesión administrativa de la explotación del Centro de Ocio y Naturaleza de la Dehesa Boyal, en Puertollano, que fue adjudicado en su día por este órgano plenario mediante acuerdo de fecha 22 de septiembre de 2005, a la empresa GRUPO ZEOS 2005, S.L.

2º. Como consecuencia de lo anterior, la concesión y contrato administrativo deberá continuar siendo objeto de explotación con arreglo a los derechos, obligaciones y restantes requisitos legales y contractuales, que se incluyeron en el citado acuerdo de adjudicación de 22 de septiembre de 2005, Pliego de Cláusulas Administrativa, oferta de la empresa concesionaria y cuantos documentos posteriores le fueran de aplicación a dicha empresa concesionaria.

3º. Sin perjuicio de todo ello, se podrá incoar expediente sancionador a la citada empresa concesionaria, por los hechos que han sido objeto de calificación en el expediente sancionador primigenio, pero contemplando únicamente la posibilidad de calificar los hechos imputados

como posible infracción, no grave, nunca merecedora de la rescisión o caducidad del contrato, ni del secuestro temporal de la concesión.

4º. Notificar el presente acuerdo a la empresa concesionaria GRUPO ZEOS 2005, S.L., Sres. Instructor y Secretaria del expediente sancionador, Servicios Económicos Municipales de Intervención y Tesorería, Unidad de Patrimonio y Contratación, Unidad Administrativa y Servicios Técnicos de Urbanismo, a los efectos legales procedentes y en especial a los efectos previstos en el expediente inicial de contratación.

Interviene en primer lugar el Sr. LOPEZ MONTERO, de Izquierda Unida, quien manifiesta que no renuncia a la propuesta emitida en esa Resolución y que no se hace un debate jurídico con el Sr. Secretario, pero si se mantiene la resolución adoptada.

Que se ha cumplido la encomienda al Sr. Instructor y Sra. Secretaria del expediente, defendiendo la incoación del expediente sancionador, estimando que el Ayuntamiento tiene la obligación y responsabilidad de hacer cumplir las obligaciones laborales y de la Seguridad Social de toda empresa concesionaria, desmenuzando los trámites y alegaciones de la empresa, una a una y matiza que lleva la empresa razón cuando dice que no se ha firmado el contrato administrativo por culpa del Ayuntamiento de lo que deberá dar cuenta el Sr. Concejal Delegado de Contratación.

En cuanto al informe del Sr. Secretario, hay discrepancia jurídica y pone un ejemplo de hace años sobre incompatibilidad de un funcionario y posteriormente vino una Sentencia en contra. Que no es vinculante y se puede adoptar el acuerdo. Que el Sr. Secretario agradece el trabajo del Sr. Instructor y Sra. Secretaria, aunque luego se descalifica jurídicamente dicho trabajo. Se dice en el informe jurídico que se trata de un incumplimiento puntual y se discrepa de esta postura jurídica, al igual de que se diga que no se ha irrogado perjuicio económico al Ayuntamiento.

Entiende que debe haber ejemplaridad. Rechaza el capitalismo salvaje, aunque no se irroge perjuicio económico y discrepa de la calificación jurídica incluida en el informe y del contenido sobre posibles consecuencias legales.

En cuanto a la consideración política estima que este es un gobierno de izquierdas y hay que ser sensibles con estos temas y que hoy tenemos la oportunidad de defender a los trabajadores.

Toma la palabra el Sr. JIMENEZ PRIETO, del Grupo Popular, quien manifiesta que también hay sensibilidad para con los trabajadores porque son muchos los trabajadores perjudicados por esta decisión de resolver el contrato. Se denunciarán todos los casos de infracciones o irregularidades laborales que se produzcan. Al Grupo Popular no se le ha permitido tener acceso a la información del expediente y no entiende la abstención del equipo de gobierno en la Junta de Gobierno Local, ya que debe gobernar, solicitando aclaración en este asunto.

Que la abstención ha propiciado que la Resolución del Instructor prosiga su camino y aparezca esa Resolución Contractual, preguntándose ¿Porqué no se han emitido todos los informes legales antes?, y su Grupo no entiende la razón de este Pleno y porqué hubo abstención del equipo de gobierno en dicha Junta de Gobierno.

Por el Grupo Socialista interviene el Sr. RODRIGUEZ MATEOS, quien puntualiza al Grupo Popular, que el asunto viene al Pleno porque así lo exige el artículo 109 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; la Junta de Gobierno no ha resuelto el contrato, sino que se debe tomar la decisión en el Pleno, y que la abstención en Junta de Gobierno fue porque no había soporte jurídico para tomar una decisión definitiva y posteriormente sí se ha emitido el informe jurídico. Que hay preocupación por todos los trabajadores (los sujetos al expediente y los restantes trabajadores). Que se va a exigir el cumplimiento al concesionario de todas las obligaciones legales y contractuales, porque los hechos pueden ser merecedores de una sanción como recoge el informe legal del Sr. Secretario.

Vuelve a intervenir el Sr. LOPEZ MONTERO, manifestando que discrepa del Grupo Popular cuando afirma que no ha tenido acceso al expediente, porque si lo hubiera pedido, el Sr. Instructor hubiera bajado del Colegio para entregarlo, y en cuanto a la abstención la debe explicar el Grupo Socialista y que la debilidad jurídica se debe demostrar o apreciar en los Tribunales, añadiendo que el expediente se hizo sin prisas, y estudiado suficientemente en la Junta de Gobierno Local.

Que el expediente se ha finalizado pese a las trabas y cuando había algunos que dudaban de su finalización, y que el presente debate en el Pleno, añade transparencia al asunto. Finaliza su intervención mencionando los incumplimientos laborales (cuatro casos), y la inexistencia de contrato laboral durante un mes y veinte días, entendiendo que ello es un grave y no un mero incumplimiento, destacando que no ha habido solidaridad con los trabajadores afectados.

Interviene de nuevo el Sr. JIMENEZ PRIETO, reseñando que sí ha existido solidaridad con los trabajadores afectados, rechazando la afirmación del Sr. LOPEZ MONTERO, e insistiendo en que su Grupo no ha tenido acceso al expediente.

Dirigiéndose al Sr. RODRIGUEZ MATEOS, pregunta porque se ha notificado a la empresa el acuerdo de la Junta de Gobierno Local sobre rescisión de contrato.

Denuncia asimismo que no se han exigido los TC1 a la empresa expedientada, ni se han efectuado inspecciones, etc.

Anuncia el voto de abstención de su Grupo, porque no hay elementos de juicio para formar un veredicto, todo ello consciente de que no se debe rescindir el contrato, para que los trabajadores continúen y el concesionario siga la explotación del Centro de Ocio.

Toma la palabra el Sr. Alcalde, para aclarar dudas y cuestiones planteadas, y en materia de trámite y procedimiento seguido informa que se ha aplicado el artículo 109 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, porque este artículo establece la competencia en el órgano plenario para rescindir el contrato, ya que fue el mismo órgano el que lo adjudicó en su día. Que el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, se ha notificado al concesionario para trámite de alegaciones y audiencia, pero en modo alguno se le notifica la resolución o rescisión del contrato, sino que únicamente se le da traslado y conocimiento de la propuesta o resolución del Sr. Instructor. Con posterioridad a esas alegaciones del concesionario, se ha emitido el informe jurídico, que es preceptivo y se recoge en dicho artículo, y al no haber existido oposición del concesionario, se evita o elude la obligación de solicitar el Dictamen al Consejo Consultivo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pero sí se debe pronunciar este Pleno respecto al fondo del asunto, a saber, si se aprueba o no la propuesta de rescisión de contrato. Que en la Junta de Gobierno Local, el Grupo Socialista se abstuvo porque se pensó que el informe de la Sra. Secretaria del expediente no aportaba argumentos legales suficientes, para justificar la rescisión del contrato. Que sí ha existido solidaridad con los trabajadores afectados y por ello anuncia el voto de su Grupo en contra de la propuesta de rescisión del contrato, porque no hay proporcionalidad entre la infracción cometida y la rescisión que se propone. Las medidas adoptadas por la Inspección de Trabajo y la Jurisdicción Laboral no tiene nada que ver con la medida que ahora se propone.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Alcalde se levantó la sesión, siendo la hora de las dieciocho y cuarenta y cinco minutos del día al principio indicado, de todo lo que, como Secretario, certifico.